

Helen Mack, reconocida defensora de los derechos humanos y presidenta de una de las instituciones más importantes de la sociedad civil guatemalteca, revela en este artículo lo que está en juego –y más– en el proceso electoral que se llevará a cabo en ese país el 9 de noviembre próximo.

Proceso electoral en Guatemala: La pugna entre poderes tradicionales y emergentes

Helen Mack

Guatemala enfrenta un proceso electoral extremadamente complejo, atípico y muy diferente de pasadas experiencias, en especial porque el debate central no consiste únicamente en la inminente elección de nuevas autoridades ejecutivas, legislativas y municipales. El tema subyacente, que suele escapar del análisis superficial y que es evadido constantemente por los candidatos presidenciales, es una pugna de grandes dimensiones que libran poderes tradicionales y poderes emergentes.

Poder tradicional

Para los primeros, los grupos tradicionales, el objetivo es recuperar su influencia determinante en el cuadrante del universo político guatemalteco donde se ejerce el poder real y del cual han sido relativamente marginados en los últimos cuatro años.

Están constituidos por el sector privado organizado, algunos exponentes de la vida política partidaria y diversos segmentos profesionales, cuyo discurso encuentra un eco definido en los más importantes medios de comunicación escritos. Tiene hegemonía la nueva generación empresarial, particularmente la industrial, que se perfila como la heredera de la vieja guardia latifundista que siempre tuvo influencia decisiva en los asuntos de Estado y preservó sus intereses, aun en los años más cruentos del conflicto armado interno, gracias a alianzas establecidas con los regímenes militares, políticos corruptos de derecha y por la jerarquía eclesiástica conservadora.

La motivación del poder tradicional, encarnado por el sector privado organizado en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), con el concurso de los exportadores

no tradicionales, la pequeña y mediana empresa, es retomar posiciones preponderantes en la correlación de fuerzas políticas; resguardar privilegios y tener cierto manejo y control de las transformaciones institucionales.

Pero ya no es al estilo rompe y rasga. Ahora, sus dirigentes tratan de añadir cierto ropaje democrático a su comportamiento histórico y participan activamente en instancias multisectoriales (como el Foro Guatemala, el Frente Cívico por la Democracia y el Grupo Barómetro) donde se intenta discutir los problemas nacionales y proponer soluciones. Y mientras ellos se sientan a este tipo de mesas, el sector que representan continúa generando condiciones de inequidad e injusticia a través

Helen Mack es presidenta de la Fundación Myrna Mack y miembro de la Comisión Nacional para el Apoyo y Seguimiento al Fortalecimiento de la Justicia.



Fotos: El Periódico

del pago de salarios ínfimos, despidos ilegales, negación de prestaciones laborales, violaciones masivas de los derechos de los trabajadores.

En ese sentido, su poder sigue incólume a pesar de los embates desatados por el gobierno del presidente Alfonso Portillo y del partido gobernante, el Frente Republicano Guatemalteco (FRG), que han mantenido una guerra frontal contra el empresariado y generaron una conflictividad terrible como único parámetro de relación.

Poder emergente

Para los segundos, los poderes emergentes, el objetivo es garantizar el control de las instancias donde se toman las decisiones de Estado, para seguir dominando el flujo de poder en el país como lo han hecho —con contundencia— durante los últimos cuatro años.

Se trata de una amalgama política y económica, producto

de la transformación que sufrieron las viejas estructuras militares contrainsurgentes, a partir del fin de los regímenes militares, la transición a la democracia y la instalación de los gobiernos civiles democráticamente elegidos.

Acostumbrados al manejo de las instituciones, a la corrupción y al enriquecimiento ilícito, los miembros de las estructuras militares (principalmente vinculadas a los servicios de operaciones y de inteligencia) encontraron en la articulación del crimen organizado la forma de mantenerse en el negocio.

El proceso ha sido lento, pero lograron aumentar su influencia en el aparato del Estado en grado proporcional al incremento de su actividad criminal, particularmente secuestros, corrupción, contrabando, narcoactividad, violencia para generar impunidad, etcétera. De esa manera, hoy conforman un poder oculto que se encuentra instalado en el

centro de la institucionalidad política de Guatemala.

Los gobiernos anteriores toleraron este crecimiento progresivo y no intentaron erradicar la influencia que cobraba este poder oculto en las diferentes instancias del Estado. Los partidos políticos tampoco han cerrado las puertas a los agentes del poder oculto que se incrustan en sus filas, cada vez en mayor número. Antes bien, propician su incorporación o pretenden no advertir esta situación, pues llevan consigo un amplio financiamiento y recursos de logística, elementos cruciales para costear el funcionamiento de las organizaciones partidarias y las multimillonarias campañas electorales.

El gran objetivo es consolidar su crecimiento, su presencia en las instancias de conducción del Estado y fortalecer la impunidad que rodea sus actividades criminales. La fuerza del núcleo duro del poder oculto se advierte en

casi todos los casos de corrupción, de gran magnitud, que han sido descubiertos parcial o totalmente en los últimos tres años: tráfico de influencias y desfalcos millonarios al Estado por la vía de operaciones financieras fraudulentas; proyectos de infraestructura social y de transporte sobrevaluados y sobrepagados; desplome de las operaciones antinarcóticas, entre otros.

El dinero generado por estas operaciones criminales, además de lo que resulta de las actividades del crimen organizado a gran escala, ha permitido que surja un nuevo poder económico distinto del tradicional. Aparejado a esto, y con la aquiescencia de los partidos políticos en general, han surgido también nuevos núcleos de poder político que hoy pelean alcaldías y diputaciones.

Aunque existe la percepción de que el actual partido de gobierno encarna este poder oculto, la realidad muestra que no tiene ese monopolio. Los agentes de ese poder oculto han sentado reales también en las demás opciones partidarias, donde actúan como candidatos a diferentes puestos de elección popular, dirigentes nacionales o de distrito, asesores, financistas, activistas o simples simpatizantes con buenas conexiones. Quizá los partidos de izquierda y algunos muy pequeños queden un poco fuera del esquema, pero no hay certeza sobre una desvinculación total.

Poder militar

Con un perfil no tan resaltado, pero con fuerte incidencia en este poder oculto, se encuentra también la fuerza militar que se niega a afrontar judicialmente los crímenes políticos pasados y presentes; que rehúye también la persecución por hechos ilegales de nuevo cuño en que han incurrido muchos castrenses.

Sigue funcionando un errado concepto del espíritu de cuerpo, del honor y la dignidad del militar, aun cuando los cuestionamientos carecen de matices políticos. Además, reniega de los incipientes y escasos rasgos democráticos del país; pero, sobre todo, rechaza su reconversión. Por ello siguen vigentes todavía el concepto del enemigo interno, la visión contrainsurgente y el apego a la doctrina de seguridad nacional.

¿Cómo se expresa este poder militar? En parte, a través del Ejército, que sigue cerrado a una eventual reconversión y continúa aferrado a una doctrina contraria a los principios democráticos. Pero, especialmente, se expresa por medio de algunos militares retirados que fueron protagonistas de primer orden durante el conflicto armado interno, dirigieron los servicios de inteligencia y aplicaron los conceptos propios de la seguridad nacional.

A estos se atribuye la formación de cuerpos clandestinos de seguridad, en coordinación con agentes de inteli-

gencia y de operaciones de alta en el Ejército; influencia en la continuidad de los aparatos paramilitares, que hoy se presentan como fuerza social organizada que desea incidir con su voto en el proceso electoral; obstrucción de procesos judiciales y promoción de procesos políticos que tienden a justificar las acciones militares del pasado. Ya ganaron el conflicto en el ámbito militar y ahora intentan también ganar en el ámbito político la interpretación de los hechos que convirtieron a Guatemala en un país de víctimas.

Varios militares están directamente en la contienda y quieren llegar al Congreso de la República. Entre los candidatos a diputados se encuentran no pocos generales: al menos tres de ellos fueron ministros de la Defensa Nacional; otros ocuparon cargos como la jefatura del Estado Mayor de la Defensa Nacional, la jefatura del Estado Mayor Presidencial, la Dirección de Inteligencia Militar y otras comandancias militares. También hay quienes fungen como asesores, trabajan en los programas de gobierno o se ocupan de los asuntos logísticos de la campaña. Van tras el ejercicio del poder público, sin duda.

Los candidatos

Es importante, por supuesto, prestar atención a los candidatos y a los partidos que los postulan, pues independientemente de la pugna que se lleva a cabo en los corredores

subterráneos del proceso electoral, los próximos gobernantes tendrán un papel decisivo y fundamental en la definición del flujo de poder en el país.

En este plano resalta otro elemento atípico del proceso electoral: la inscripción del general Efraín Ríos Montt, candidato presidencial del gobernante FRG, pese a que el artículo 186 de la Constitución prohíbe esta condición por haber gobernado de facto. Es una candidatura inconstitucional que se concretó por la acción fraudulenta de cinco juristas, un magistrado de la Corte Suprema de Justicia y cuatro magistrados de la Corte de Constitucionalidad, al resolver a favor de Ríos Montt los numerosos recursos planteados contra su inscripción. Al respecto, el endeble Estado de derecho ha sufrido el mayor impacto negativo en este proceso electoral.

A Ríos Montt y a sus cercanos colaboradores se les vincula con los grupos de poder militar y con al menos un segmento del poder oculto; él y su partido afrontan también el desgaste de estar haciendo gobierno y de sus múltiples actos de corrupción, impunidad y abuso en que han incurrido varios de sus funcionarios.

Las encuestas dicen que Óscar Berger, candidato de la Gran Alianza Nacional (integrada por tres organizaciones de reciente creación y con débil estructura partidaria) es



El pasado 24 de julio, exigiendo la inscripción del general Efraín Ríos Montt, miles de dirigentes y militantes del gobernante partido Frente Republicano Guatemalteco realizaron actos de violencia contra objetivos precisos: oficinas de prominentes empresarios, Tribunal Supremo Electoral, Corte de Constitucionalidad y Corte Suprema de Justicia; y contra los habitantes de un sector residencial de clase alta. Atacaron a los periodistas. Así, falleció el reportero Héctor Ramírez, quien sufrió un paro cardíaco por el esfuerzo físico que hizo al huir de las turbas.

el favorito cuando se trata de medir la intención de voto. Cuenta con el respaldo del sector empresarial, recibe trato preferencial en los medios de comunicación escritos y de alguna manera encarna el retorno de quienes han estado relativamente desplazados del ejercicio del poder público y político en el país.

Álvaro Colom, de la Unidad Nacional de la Esperanza, quien podría disputar la presidencia en una segunda vuelta electoral, tampoco está a salvo de ciertos señalamientos, pues su entorno también está minado a pesar de que no se le vincula abierta y directamente, al menos no en grado extremo, con los grupos en pugna ya mencionados.

Ellos tres, según las encuestas, son las figuras principales. Ríos Montt está descartado como opción democrática; Colom y Berger no ofrecen confianza suficiente. Hay tantas dudas. Y la pregunta generalizada es: "¿Quién es el menos inadecuado?".

Y mientras amplios segmentos de población se hacen esta pregunta, los poderes emergentes y los poderes tradicionales continúan con su propia lucha, pensando en el dominio del flujo de poder. Entonces, también puede surgir otra pregunta: ¿Podrían estos poderes en pugna realizar una eventual negociación, con la aquiescencia de quienes sean electos? Las respuestas empezarán a perfilarse en el curso del mes próximo. ▲